

México: En busca del consenso perdido

Soledad Loeza

Soledad Loeza: Profesora Investigadora del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México. Miembro del consejo editorial de la revista Nexos y colaboradora de Diálogos y Foro Internacional.

La conciencia de la frágil legitimidad del sistema político mexicano ha sido una sombra omnipresente en los casi dos años de gobierno del presidente mexicano Miguel de la Madrid. Para conjurarla recurrió primero a la práctica inaugurada por el entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional, Luis Echeverría: la autocrítica. Ante el desprestigio del poder público, una y otra vez los sucesivos equipos gubernamentales, el del propio Echeverría (1970-1976) y el de su sucesor José López Portillo (1976-1982), han buscado desde entonces justificar su presencia en el poder reconociendo los errores y las prácticas viciadas de quienes los antecedieron. La autocrítica se ha utilizado - con creciente audacia - como sinónimo de renovación. Pero también la autocrítica tiende a convertirse en un lugar común del discurso político mexicano.

Semejantes actos de contrición tienen un sentido político inmediato: despertar expectativas de cambio en una ciudadanía que muestra cada vez más su desapego, cuando no su rechazo - no sólo a los hombres sino a las instituciones que la gobiernan (y que hacen posibles a esos hombres). Para que la autocrítica no pierda su eficacia, ha sido necesario que los planteamientos sean cada vez más severos y las decisiones más comprometedoras en términos del pecado original con que nace en México todo nuevo gobierno: la irremediable continuidad estructural que lo emparenta con su antecesor, en tanto que todos acceden a la silla presidencial como miembros del mismo partido dominante desde hace más de sesenta años, y como sucesores designados por el presidente de turno.

Es probable que la crisis política actual, de la que tanto se habla, traiga consigo los efectos rezagados de las denuncias que hizo el presidente Echeverría de la antidemocracia diazordacista o las de López Portillo contra los excesos echeverriístas, de suerte que el efecto a mediano plazo de la autocrítica puede medirse en el ensanchamiento de la distancia que separa a los gobernantes de sus gobernados.

BORRÓN Y CUENTA NUEVA

A diferencia de Luis Echeverría y de José López Portillo, sin embargo el procedimiento de De la Madrid para diferenciarse de su antecesor sobre todo en el primer año de gobierno, fue formulado más como una crítica que como una autocrítica. El proyecto lamadridiano de gobierno pretendía no restaurar ni recuperar de lo perdido lo que se encontrara, sino partir de cero y hacer tabla rasa de herencias e hipotecas que no obstante se han impuesto inexorablemente sobre tan ambiciosa empresa.

El consentimiento de sus gobernados quería asentarlos De la Madrid sobre nuevas bases, que muy desgastadas le parecían las que podía ofrecerle el sistema en 1982. Indudablemente lo estaban. El auge petrolero del sexenio anterior enmascaró, y en algunos casos profundizó, las distorsiones estructurales de la economía mexicana, las cuales finalmente se rebelaron indómitas contra el discurso y la necesidad políticos. El reformismo que entre 1970 y 1982 amplió los canales de participación política floreció, en buena medida, gracias a las políticas de crecimiento económico - la generosidad del príncipe brota de la abundancia - y de alguna manera, tanto Echeverría como López Portillo lograron restaurar la confianza en las instituciones políticas. Las diferentes reformas aperturistas - desde las específicamente electorales hasta la mera tolerancia gubernamental ante la crítica y la oposición - nublaron temporalmente la esencia autoritaria del sistema, pero ésta se impuso una vez más victoriosa el 1º de septiembre de 1982, cuando el presidente López Portillo anunció de manera completamente inesperada la nacionalización de la banca. Cuanto más ágil pareció el crecimiento económico de los años 1978-1981, más amarga ha sido la rabia contra el espejismo petrolero y sus oficiantes. Súbitamente la crisis económica hizo aflorar en 1982 los rencores políticos que bajo diferentes matices ideológicos arrastraba la sociedad mexicana desde 1968 - año de la gran represión gubernamental al movimiento estudiantil - contra el autoritarismo.

LA EROSIÓN DEL CONSENSO

El consenso que funda la estabilidad de los sistemas políticos no se crea de un día para otro, ni es producto o sinónimo de decisiones administrativas de corto plazo. De igual manera que el consenso profundo que da consistencia al tejido social es producto de una larga acumulación de consentimientos, su destrucción sólo es posible a través de un golpe violento que arrase todo sentimiento de identificación social y política, o bien el consenso va siendo minado, erosionado por repetidas

transgresiones al código que implica. Esto es lo que ha ocurrido en México en los últimos quince años.

Un pacto político supone, además de actores, prácticas y presupuestos implícitos, todo ello cambió en los años dorados del reformismo de los setenta, modificando sustancialmente el pacto revolucionario original y el pacto desarrollista de los cincuenta. El pluripartidismo no es una tradición política nacional, como tampoco lo es una actividad parlamentaria que si no es eficaz, por lo menos se ha hecho presente, o la creación espontánea - y sobre todo la supervivencia - de las más diversas organizaciones de defensa social independiente. La violencia de las rupturas que se produjeron en México en el interior de la élite política en 1982 y entre ella y la cúpula empresarial a raíz de la nacionalización de la banca; la multiplicación de las objeciones de las clases medias a la manera como se ejercía el poder, el desasosiego de los obreros, la invisibilidad política de los campesinos, revelan hondos desgarramientos en la trama del consenso social.

¿ADIOS AL POPULISMO?

En diciembre de 1982, el nuevo gobierno percibió este fenómeno e hizo de esta institución - el consenso se vive, no se analiza - la lógica fundamental de su proyecto de renovación. El punto de partida explícito de la voluntad de instaurar un nuevo pacto, un nuevo consenso, fue la aguda crisis económica en la que se encontraba en ese momento el país. Del diagnóstico del deplorable estado de la economía nacional se siguió una propuesta de solución que era en cambio profundamente política. En negación rotunda de la tradición, Miguel de la Madrid ya no aceptaría subordinar la racionalidad económica a la racionalidad política o social. El "realismo económico" era, desde un principio, también una opción política cuyos alcances a corto, y posiblemente mediano plazo, suponían un pacto restrictivo que, como se vio a lo largo de 1983, excluía - o por lo menos relegaba a segundo plano - a obreros y campesinos, y a los políticos que se aferraban a antiguas lealtades.

Alterando los términos de la ecuación: la economía primero, la política después, el gobierno lamadridiano configuró un proyecto innovador. Es cierto que la mecánica anterior, que puso la economía al servicio de un pacto político previo y que pretendía justificarse en el crecimiento económico, había degenerado en excesivo proteccionismo a la empresa privada, en subsidios onerosos para el Estado - que a su vez alentaron el desorbitado crecimiento de la burocracia -, cuando no en corruptelas y dispendios. Pero también es cierto que todo aquello era efectos perversos del genio original del Estado mexicano posrevolucionario, que asentaba sus fueros sobre el

consentimiento que a cambio de gasto social y expectativas de bienestar le dispensaban las clases populares. La condena a todas estas plagas se resumió desde, principios de 1983 en el rechazo desdénso del gobierno al "populismo", el cual desde entonces se convirtió en una categoría negativa en la que se encajonaba todo aquello que pudiera oponerse a la propuesta lamadridiana.

La ruptura con el populismo no fue más que un querer desgajarse de un árbol bastante decaído y de dos predecesores incómodos, sino de toda una tradición que de hecho era un obstáculo simbólico para la aceptación del programa de reordenamiento económico y para los cambios estructurales de largo plazo que conformaban la utopía lamadridista: la individualización de la vida política, la racionalización económica del Estado y la descentralización.

El ultraje fue directo al corazón del sindicalismo oficial, del partido dominante y de muchos más que consideran que en México la legitimidad histórica del populismo sigue intacta, a pesar de Luis Echeverría y de José López Portillo (cuyo "populismo financiero" de fin de sexenio le ha valido un casillero en el que no caben los cinco años nueve meses anteriores al 1º de septiembre de 1982). No en balde sigue siendo México un país en el que la mayoría de la población son las clases populares.

Los lamadridistas interpretaron mal el signo de los tiempos. La condena al populismo agravó las tensiones entre el gobierno y el movimiento obrero - en un momento en que la economía no ofrecía ninguna base previsible de reconciliación -, enajenó aún más al partido oficial y ahondó su sensación de desamparo. Resueltos uno y otro a no dejarse arrinconar en una oposición maniatada, se han resistido a la exclusión. Las derrotas electorales que sufrió el PRI en 1983 y a principios de 1984 en diferentes municipios de provincia, el desprestigio al sindicalismo implícito en las denuncias contra la corrupción y las amenazas contra los intereses creados que representaba la descentralización - por ejemplo para el gigantesco sindicato nacional de maestros, SNTE -, acicatearon actitudes de resistencia activa y pasiva al proyecto lamadridiano en momentos en que era urgente obtener por lo menos la aceptación de su programa económico.

EL NUEVO PACTO

El nuevo consenso que proponía De la Madrid en 1983, era una comunidad de rechazo al pasado, para luego construir una visión común del futuro. Tal vez si ésta hubiera sido más clara, si los objetivos de recuperación económica hubieran pareci-

do más cercanos en diciembre de lo que parecían en mayo de 1983, la propuesta hubiera ido más lejos.

La "renovación moral" la lucha contra la corrupción política y administrativa, la creación de nuevos símbolos de adhesión a las instituciones, era la piedra de toque de lo que debía ser el nuevo consenso. La denuncia cotidiana de la corrupción de los funcionarios públicos fue el recurso que se utilizó con más insistencia - porque era el más expedito - para hacer socialmente aceptable la instauración del nuevo pacto. Pero en un principio la renovación moral era mucho más que la historia de policías y ladrones en que se ha convertido.

En su formulación original, la renovación moral suponía además del control y la moralización de la administración pública el fin de la política ficción. Esto significaba limpieza de procesos electorales, poner al PRI en igualdad de circunstancias con los otros partidos, como si fuera uno de tantos, negar a los sindicatos oficiales los privilegios políticos que han derivado de su "lealtad al Presidente de la República" y reducirlos al cumplimiento de funciones estrictamente sindicales. La renovación moral era querer imponer una legitimidad que no corresponde a estructuras aún vigentes y cuya eficacia no se ha disipado del todo. Así lo demuestran el hecho de que a pesar de la situación económica de franco y constante deterioro del nivel de vida de la mayoría de la población, la dinámica social no se haya salido de madre, y los programas de acción inmediata que se han tenido que crear - a pesar de presupuestos iniciales de poner fin a subsidios y restringir el gasto presupuestal - para proteger el empleo, la producción y el consumo de las clases populares.

El contexto internacional también ha sido un obstáculo para el proyecto del pacto lamadridiano. La opinión pública está dividida en cuanto a las virtudes de la orientación de la política exterior mexicana hacia Centroamérica y hacia Estados Unidos. En un descuido esta variable puede agudizar la polarización social que ha venido gestando el deterioro de la economía, e introducir un componente ideológico en el que se resuman todos los desacuerdos en torno a la política económica.

Según se ve, no estaba el horno para utopías políticas; indiscutiblemente la realidad se ha impuesto una y otra vez en el proyecto lamadridiano. Después de las últimas elecciones locales, las victorias electorales del PRI parecen de nuevo inevitables e ineludibles, tan fatales como el abrazo que el 4 de julio último le dio al presidente De la Madrid al líder de un sindicato, célebre por sus prácticas corruptas precisamente. La presencia y el apoyo que el presidente otorgó al partido oficial al clausurar su XIIIa. Asamblea fueron sorprendentes y hasta desmesurados. De la

Madrid aprovechó esta ocasión para desvincularse de López Portillo saludando de entrada y enfáticamente "al partido que me llevó a la Presidencia de la República". Rechazó también "personalismos" y "liderazgos iluminados" con el claro propósito de realzar la importancia de la organización priísta de la que tanto se había distanciado en meses anteriores. De la Madrid expresó nuevamente su deseo de recuperar la institucionalidad tradicional del sistema político mexicano en el informe que sobre sus actividades presentó ante la Cámara de Diputados el 1° de septiembre pasado. En él tuvo que reconocer que el "conjunto macizo de instituciones que nos dan solidez, estabilidad y capacidad de dirección" - entre las cuales se incluyen necesariamente presidencialismo, partido y sindicatos oficiales han posibilitado la aplicación del severo programa de reordenación económica, sin que se hayan producido confrontaciones sociales.

No obstante todo lo anterior, el gobierno lamadridiano ha tenido la sabiduría de dejar fluir los desconciertos y los descontentos. También es cierto que es la situación económica la que trasgrede los presupuestos y los procedimientos que contenían los acuerdos pasados. Todo parece indicar que este gobierno representa una profunda transición en la que se han exacerbado los enfrentamientos y las oposiciones. El nuevo consenso - cuyo contenido está aún por reconocerse - tendrá que asumirlos, no se trata de que los resuelva sino de que los trascienda, y para hacerlo, el poder tendrá que sacudirse la tentación del aislamiento que se cernía sobre él cuando se empeñaba en imponer su propia idea de lo que debía ser el nuevo pacto. Un consenso político no debe ser, es. La magia del poder en México parece ida para siempre. Hay que recapturarla.